

Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Miguel Ángel Rodríguez Albarrán, abogado, quien, en representación del demandante en autos sobre tutela por vulneración de derechos fundamentales, caratulados “Quezada con Astilleros y Maestranzas de la Armada de Chile”, del Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, los ministros señores Freddy Vásquez, Fabio Jordán y la ministra señora Matilde Esquerré, por haber dictado con falta o abuso grave la resolución de diecinueve de agosto del año en curso, por medio de la cual confirmaron aquella que, con fecha diecinueve de julio último, declaró de oficio la caducidad de la acción de tutela planteada.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los jueces ya mencionados indican no haber incurrido en falta y abuso, por cuanto aplicaron la ley conforme los supuestos de hecho del proceso, del cual se desprende que la separación del trabajador se produjo el día 31 de enero de 2019, y que la demanda se presentó el 4 de mayo último, de manera que el plazo perentorio para demandar de 60 días hábiles, en la especie, se excedió. Manifiestan, de este modo, su rechazo a la tesis de la parte recurrente, que pretende que se realice dicho cómputo desde la suscripción del finiquito y no de la separación del trabajador.

Tercero: Que el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los jueces recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte. En efecto, el recurso gira en torno a la interpretación que hicieron de las normas que rigen los plazos de caducidad de las acciones deducidas, en concreto, si es posible sostener, como pretende el recurrente, que el despido, en cuanto acto



complejo, se consolida con la suscripción del respectivo finiquito, por lo que el plazo para deducir la acción de tutela, debe computarse desde dicha fecha.

Al respecto cabe señalar que, como ha dicho reiteradamente este tribunal, el proceso de interpretación de la ley que llevan a cabo los juzgadores en cumplimiento de su cometido no puede ser revisado por la vía del recurso de queja, porque constituye una labor fundamental, propia y privativa de aquellos, salvo que se constate una violación evidente y manifiesta en dicha actividad, que por su entidad y arbitrariedad, configure una falta o abuso que deba ser enmendada, cuestión que, en la especie, no concurre, por cuanto se limitaron a argumentar, arribando a conclusiones jurídicas que se enmarcan dentro de los criterios de racionalidad propios del ejercicio de la jurisdicción, constituyendo el presente arbitrio, en definitiva, una mera expresión de la disconformidad del recurrente, que como dicho, no es controlable por esta vía.

Sexto: Que lo precedentemente razonado resulta suficiente para concluir que el presente arbitrio debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que **se rechaza** el recurso de queja interpuesto en contra de los ministros recurridos de la Corte de Apelaciones de Concepción.

Acordado con el voto en contra del ministro señor Silva, quien fue de opinión de acoger el recurso de queja en razón de los siguientes fundamentos

1.- Que de estos antecedentes, y de aquellos que aparecen en el sistema computacional, correspondientes a la causa Rol Ingreso T-184-19 ya referida, y de su apelación, ingresada a la Corte de Apelaciones de Concepción bajo el Rol 451-2019, constan los siguientes hechos:

a.- Por presentación de 4 de mayo de 2019, el recurrente dedujo demanda de tutela laboral con ocasión del despido; y, en subsidio despido improcedente y cobro de prestaciones que indica, en contra de su ex empleadora, la Astilleros y Maestranzas de la Armada. Por medio de la primera acción, acusa la vulneración de sus derechos en el acto de la suscripción del finiquito, consistentes en presiones indebidas para aceptarlo e impidiéndole efectuar reserva de derechos, por lo cual considera tal documento como nulo.

b.- Por resolución de 19 de julio de 2019, el Juzgado de Letras del Trabajo de Concepción, acogiendo una petición de la parte demandada, declaró la caducidad de la acción impetrada, pues, en su entender, fue presentada de forma



extemporánea, al transcurrir en exceso el plazo legal para su presentación, contado desde la separación de los servicios, acaecida el 31 de enero de este año. No obstante, el recurrente estima que dicho término, debe computarse desde la suscripción del finiquito, por tratarse el despido de un acto complejo, que se consolida una vez cumplidas todas las formalidades, incluyendo la suscripción de dicho documento.

c.- Una sala de la Corte de Apelaciones de Concepción, al conocer el recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la resolución referida en la letra que precede, por resolución de 19 de agosto último, la confirmó.

2.- Que de acuerdo a lo expuesto, aparece que la sentencia recurrida privó a la actora, en último término, de su derecho a obtener un pronunciamiento judicial de los capítulos demandados, argumentando que la oportunidad procesal para interponer la acción intentada habría caducado, planteando que la suspensión del plazo para su interposición, en la especie, no procede.

3.- Que si bien el artículo 485 del Código del Trabajo, le otorga al trabajador la posibilidad de deducir denuncia de tutela laboral dentro de sesenta días contados desde la separación del trabajador, en la especie, el acto vulneratorio que se acusa, se verifica justamente en el momento de la suscripción del finiquito, por lo que, aunque se plantea como una acción de tutela con ocasión del despido, se trata de una denuncia que invoca como hechos basales, actividad del empleador cometida en una instancia posterior, respecto la cual, un tribunal del trabajo tiene plena competencia para conocer, de manera que el cómputo del plazo debe iniciarse desde el acto atentatorio denunciado, conforme lo estipula nuestro ordenamiento legal.

4.- Que la determinación del correcto alcance de la normativa aplicable, debe regirse teniendo presente los principios inspiradores que justifican la existencia del derecho laboral, que, como es sabido, se encuentra presidido, especialmente, por el principio tuitivo o protector, siendo uno de sus basamentos más sensibles, el relativo a la garantía del libre acceso a la justicia.

Tal concepto, se alza como fundamento esencial de todo Estado de Derecho, garantizado expresamente por nuestra Carta Fundamental en el numeral 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental, que reconoce la prerrogativa universal de igual protección de la ley, el derecho a la defensa jurídica, el derecho a ser juzgado por el juez natural, y el derecho a un justo y racional procedimiento,



garantía que, además, encuentra como contrapartida orgánica, los principios rectores de la actividad jurisdiccional consagrados en el artículo 76 del texto constitucional, específicamente el de inexcusabilidad, que impone a los jueces el deber imperativo de otorgar un pronunciamiento de mérito sobre la controversia que legalmente se le plantee, sin poder excusarse de hacerlo.

5.- Que, de este modo, toda interpretación que limite de alguna manera el acceso a la posibilidad de obtención de un pronunciamiento judicial que adjudique un derecho dubitado, aparece despojada de la razonabilidad y justificación que precisaría para ser aceptada como admisible a la luz de lo dispuesto en el N° 26° del artículo 19 de la Carta Fundamental, máxime en un contexto de excepcional sensibilidad e importancia, como el del derecho del trabajo, que se vincula con la esencia misma del ejercicio de la jurisdicción, en cuanto función tutelar de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento, que por la especial sensibilidad de que su rol protector impone, debe en lo posible evitar salidas incidentales que impidan un pronunciamiento de mérito.

6.- Que en ese sentido, cabe concluir que el término de caducidad de la acción, en este particular caso, debe computarse a partir de los hechos vulneratorios que se denuncian, ocurridos con ocasión de la suscripción del finiquito, esto es, el 20 de febrero de 2019, de manera que a la fecha de interposición de la demanda de autos –4 de mayo de 2019– no había transcurrido el plazo máximo de sesenta días hábiles a que se refiere el artículo 485 y 486 del Código del Trabajo, configurándose, de esta manera, una falta y abuso en la aplicación de las normas pertinentes, que hacen menester acoger el arbitrio en estudio.

Regístrese y archívese.

N°24.180-19

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Gloria Ana Chevesich R., señor Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G., y los abogados integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Iñigo De la Maza G. No firma el abogado integrante señor De la Maza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve.





En Santiago, a dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

